

**RE: Alegatos 2 Instancia\_850013105002201900279\_MARIA CRISTINA BASTOS DE CIPAGAUTA**

Secretaria Tribunal Superior - Yopal - Seccional Tunja <sectsyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Lun 29/11/2021 3:49 PM

Para: rballesteros@ugpp.gov.co <rballesteros@ugpp.gov.co>

CC: myctransportesltda@gmail.com <myctransportesltda@gmail.com>; ramirezgomezdog@gmail.com <ramirezgomezdog@gmail.com>

Doctora  
Rocío Ballesteros

Cordialmente acuso recibido.

Atentamente,

César Armando Ramírez López  
Secretario General

---

**De:** ROCIO BALLESTEROS PINZON <rballesteros@ugpp.gov.co>

**Enviado:** viernes, 26 de noviembre de 2021 2:14 p. m.

**Para:** Secretaria Tribunal Superior - Yopal - Seccional Tunja <sectsyopal@cendoj.ramajudicial.gov.co>

**Cc:** myctransportesltda@gmail.com <myctransportesltda@gmail.com>; ramirezgomezdog@gmail.com <ramirezgomezdog@gmail.com>

**Asunto:** Alegatos 2 Instancia\_850013105002201900279\_MARIA CRISTINA BASTOS DE CIPAGAUTA

Cordial saludo,

Adjunto remito el asunto de la referencia, favor confirmar recibido.

Muchas gracias, feliz y bendecido día.

Atentamente

**ROCIO BALLESTEROS PINZON**

R.L. ABOGADOS BALLESTEROS PINZON S.A.S.  
REGIONALES SANTANDER Y CASANARE

**Aviso de Confidencialidad:** La información contenida en este correo electrónico y sus anexos contiene información de carácter confidencial de la UGPP que se encuentra dirigida en forma exclusiva al destinatario del mismo para su uso quien se encuentra obligado a mantener reserva sobre toda la información aquí contenida. Si usted es lector de este mensaje pero no su destinatario, le informamos que no podrá usar,

retener, imprimir, copiar, distribuir o hacer público su contenido, pues de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 de 2009 y todas las que le apliquen. Si ha recibido este correo por error, le agradecemos informarlo a [cdsti@ugpp.gov.co](mailto:cdsti@ugpp.gov.co) y borrarlo de su sistema. Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor, y no necesariamente representan la opinión oficial de la UGPP. El remitente no aceptará responsabilidad alguna por daños causados por cualquier virus que pueda contener este correo.



Honorable Magistrado,

**Dr. ALVARO VINCOS URUEÑA.**

**TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE YOPAL - SALA ÚNICA.**

E. S. D.

**REFERENCIA:** ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA.  
**DEMANDANTE:** MARIA CRISTINA BASTOS DE CIPAGAUTA.  
**DEMANDADO:** UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP.  
**MEDIO DE CONTROL:** ORDINARIO LABORAL.  
**RADICADO JUZGADO:** 201900279-01.

**ROCIO BALLESTEROS PINZON**, mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía número 63.436.224 de Vélez, abogada en ejercicio, portadora de la T. P. No. 107.904 C. S. J., actuando en nombre y representación judicial de la **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP**, conforme al poder otorgado por su representante legal, atentamente acudo ante su Despacho para presentar **ALEGATOS DE CONCLUSIÓN EN SEGUNDA INSTANCIA**, con fundamento en las siguientes consideraciones de orden legal, doctrinario, jurisprudencial y probatorio.

**DEL RECURSO:**

**CONSIDERACIONES POR LAS QUE SE DEBE CONFIRMAR LA SENTENCIA QUE NO CONDENA A LA UGPP AL CUMPLIMIENTO DE LO PRETENDIDO Y CONDENA EN COSTAS A LA PARTE VENCIDA.**

Una vez más se le reitera al despacho es menester confirmar la sentencia de primera instancia, la cual deniega las pretensiones de la señora **MARIA CRISTINA BASTOS DE CIPAGAUTA** y absuelve a mi defendida, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP, toda vez que por ningún motivo legal se encuentra facultada para realizar estudio de dicho derecho a la señora **MARÍA CRISTINA BASTOS DE CIPAGAUTA**, toda vez que no fue la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP la última administradora pensional a la que estuvo afiliada.

Si bien mi defendida fue vinculada al proceso como litisconsorcio necesario, es pertinente expresar que no fue la UGPP la última administradora pensional a la que estuvo afiliada la demandante, igualmente, no le asiste ninguna obligación de reconocer la devolución de saldos, porque por mandato del Artículo 6 del Decreto 575 de 2013, la facultad de dicho reconocimiento se encuentra siempre y cuando se hubiese causado el derecho antes de la cesación de actividades como administradoras, cesación de actividades que ocurrió el 01 de julio de 2009.

Debe tenerse en cuenta que las Entidades Públicas, por mandato constitucional, sólo pueden realizar las funciones que la ley de manera expresa les atribuye, prohibiendo de manera tacita desarrollar aquellas que no están expresamente permitidas por las normas, tal como lo señala el Artículo 6° constitucional.

Atendiendo a lo que dispone el ordenamiento jurídico para el nacimiento de las obligaciones, conforme a la ley 84 de 1873, nuestro actual Código Civil, las mismas pueden nacer por disposición de la ley, sin embargo, una vez expuestos en el anterior acápite los fundamentos jurídicos que determinan el nacimiento del derecho a la devolución de aportes a pensión, es decir, de la indemnización sustitutiva de pensión de vejez, se tiene que respecto a la señora **MARÍA CRISTINA BASTOS DE CIPAGAUTA**, el mismo no nació a la vida jurídica, por tanto, NO hay a cargo de mi defendida una obligación de “hacer”, referente a reconocer y pagar un derecho al que mi defendida no es responsable.

Por lo tanto, la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP no puede responder con el patrimonio del Sistema General de Pensiones por las pretensiones de la parte demandante, tal como reconoció el juez en primera instancia, pues de hacerlo contribuiría aún más al detrimento patrimonial del financiamiento del sistema pensional, más aún, cuando está claramente establecido, que la Entidad que represento, actúa dentro de los parámetros que rigen el Sistema Pensional Colombiano y bajo el Principio de Buena Fe Constitucional.

### **ARGUMENTOS DE DEFENSA**

La Constitución Política en diferentes artículos, limita las funciones de los servidores públicos, toda vez que éstos se encuentran facultados únicamente a aquello que la ley les permite, lo cual se expresa de la siguiente manera:

*“**ARTICULO 6o.** Los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes. **Los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus funciones.**”*

Negrillas y subrayas fuera de texto.

Ahora bien, entendiéndose a los Jueces y Magistrados como Servidores Públicos, Auxiliares de la Justicia, la misma Constitución expone de antemano su importancia, pues su trabajo principal consiste en asegurar la vigencia de un orden justo según lo establecido para el caso por el ordenamiento jurídico, razón por la que su labor debe estar limitada por lo expreso en ley, para lo cual, en el artículo 228 y 230 dispone:

*“ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su funcionamiento será desconcentrado y autónomo.*

*[...]*

***ARTICULO 230. Los jueces, en sus providencias, sólo están sometidos al imperio de la ley.***

*La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina son criterios auxiliares de la actividad judicial.”*

Subrayas y negrilla fuera de texto.

El motivo de la impugnación aquí recurrida es entonces que el juez fundamenta la omisión de un deber legal como lo es el condenar en costas, para lo cual es importante reconocer que la actividad judicial de éste debe ser en coherencia y lógica con la ley procesal, la cual se aplica para todas las instancias, de manera, que el fallo del A Quo, debe cumplir con la regla:

***“ARTICULO 29. El debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas.***

*Nadie podrá ser juzgado sino conforme a leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal competente y con observancia de la plenitud de las formas propias de cada juicio.*

*En materia penal, la ley permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable.*

*Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable. Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio, durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas y a controvertir las que se alleguen en su contra; a impugnar la sentencia condenatoria, y a no ser juzgado dos veces por el mismo hecho.*

*Es nula, de pleno derecho, la prueba obtenida con violación del debido proceso.”*  
Negritas fuera de texto.

Si bien en el proceso se vieron afectados los derechos procesales de mi defendida, cierto es que con la sentencia en primera instancia se evitó un detrimento en el patrimonio público, teniendo en cuenta que mi representada es una entidad de orden nacional, esto es, de orden pública, siendo su función principal el reconocimiento de derechos pensionales causados a cargo de administradoras del Régimen de Prima Media del orden nacional y de las entidades públicas del orden nacional que hayan tenido a su cargo el reconocimiento de pensiones (sobre las cuales se haya decretado o se decrete su liquidación), por ende, tiene a su poder **recursos públicos de la seguridad social**, los cuales no podrán usarse ni destinarse para fines diferentes a ella o en perjuicio del bien

general, más cuando dicho dinero se dispone para conceder derechos pensionales obligatorios para **todos los ciudadanos**, tal como lo continúa expresando nuestra Constitución Política:

*“ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.*

*[...]*

*No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.”*

Negrilla fuera de texto.

Precepto nuevamente consagrado en la Ley 100 de 1993, por la cual se crea el sistema de seguridad social integral, en la que se menciona:

*“ARTÍCULO 9o. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS. No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la seguridad social para fines diferentes a ella.”*

Los dineros relacionados a la seguridad social, por orden constitucional, gozan de atributo de destinación específica, tal como lo dice la carta política misma, así que el uso indebido de los mismos, como en el presente caso se presenta, **consagran una violación constitucional**.

Ahora, teniendo en cuenta que mi defendida no cuenta con recursos propios sino que éstos son del Presupuesto Nacional para la concesión de los derechos pensionales debidamente adquiridos, nuestra Constitución Política continúa señalando los lineamientos fundamentales sobre los cuales se estructura el derecho a la Seguridad Social, dentro de tales parámetros tenemos:

*“ARTICULO 48. La Seguridad Social es un servicio público de carácter obligatorio que se prestará bajo la dirección, coordinación y control del Estado, en sujeción a los principios de eficiencia, universalidad y solidaridad, en los términos que establezca la Ley.*

*Se garantiza a todos los habitantes el derecho irrenunciable a la Seguridad Social.*

*[...]*

*No se podrán destinar ni utilizar los recursos de las instituciones de la Seguridad Social para fines diferentes a ella.*

*La ley definirá los medios para que los recursos destinados a pensiones mantengan su poder adquisitivo constante.*

*El Estado garantizará los derechos, la sostenibilidad financiera del Sistema Pensional, respetará los derechos adquiridos con arreglo a la ley y asumirá el pago de la deuda pensional que de acuerdo con la ley esté a su cargo. Las leyes*

en materia pensional que se expidan con posterioridad a la entrada en vigencia de este acto legislativo, **deberán asegurar la sostenibilidad financiera de lo establecido en ellas.**

*Sin perjuicio de los descuentos, deducciones y embargos a pensiones ordenados de acuerdo con la ley, por ningún motivo podrá dejarse de pagar, congelarse o reducirse el valor de la mesada de las pensiones reconocidas conforme a derecho.*

*[...]*

**La ley establecerá un procedimiento breve para la revisión de las pensiones reconocidas con abuso del derecho o sin el cumplimiento de los requisitos establecidos en la ley o en las convenciones y laudos arbitrales válidamente celebrados.**

*[...]”*

Subrayas y negrillas fuera de texto.

Por lo anterior, es menester poner de presente que la Seguridad Social, al ser un derecho obligatorio, garantizado a **todos los habitantes**, requiere que los recursos con los que se dará cumplimiento a tales beneficios sean tratados con la mayor eficiencia posible, pues de la sostenibilidad financiera de éste sistema depende que a los administrados se les conceda sus derechos en debida aplicación de la ley, siendo el Estado, en todas y cada una de sus representaciones y manifestaciones, como en este caso el del funcionario judicial en su sentencia, el encargado de velar por dicha eficiencia del erario público, aún más cuando en el presente proceso se ha probado claramente que la Entidad que represento actúa dentro de los parámetros que rigen el Sistema Pensional Colombiano y bajo el Principio de Buena Fe Constitucional.

Así entonces, la administración de justicia, por orden constitucional, **debe encargarse** de promover el ejercicio de un orden justo, y por ende, ordenar las costas procesales y las agencias en derecho a las que mi defendida tiene derecho por ser la parte vencedora del proceso y así compensar los gastos ejercidos por mi Procurada en el ejercicio de su defensa, toda vez que, tanto del empleador, como la parte demandante, con la finalidad de evitar el debilitamiento del Sistema Pensional, deben realizar los aportes al sistema de pensiones, correspondiéndole el 25%, al trabajador y el 75% al Empleador para efectivamente reconocer un derecho pensional, tal como lo ordena la Ley 100 de 1993, así:

**“ARTÍCULO 22. OBLIGACIONES DEL EMPLEADOR.** *El empleador será responsable del pago de su aporte y del aporte de los trabajadores a su servicio. Para tal efecto, descontará del salario de cada afiliado, al momento de su pago, el monto de las cotizaciones obligatorias y el de las voluntarias que expresamente haya autorizado por escrito el afiliado, y trasladará estas sumas a la entidad elegida por el trabajador, junto con las correspondientes a su aporte, dentro de los plazos que para el efecto determine el Gobierno.*

*El empleador responderá por la totalidad del aporte aun en el evento de que no hubiere efectuado el descuento al trabajador.”*

Dicha obligación la profundiza la Ley 797 de 2003, de manera que define el porcentaje



específico en el que cada parte de la relación laboral debe proceder, conceptuando:

*“ARTÍCULO 7. El artículo 20 de la Ley 100 de 1993 quedará así:*

*[...]*

***Los empleadores pagarán el 75% de la cotización total y los trabajadores el 25% restante.***

*En ningún caso en el régimen de prima media se podrán utilizar recursos de las reservas de pensión de vejez, para gastos administrativos u otros fines distintos.”*

*Negrillas fuera de texto.*

Es el Empleador quien ostenta la obligación legal de acudir y establecer el motivo por el cual no se adelantaron las cotizaciones al Sistema de Seguridad Social Integral, por lo tanto también estará a su cargo la de adelantar el pago de los aportes al Sistema de Pensiones en el porcentaje establecido en la norma, como lo es el 75% de la totalidad de la cotización a la CAJA NACIONAL DE PREVISIÓN SOCIAL CAJANAL, o UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL - UGPP, para el financiamiento de la Pensión de Jubilación que ostenta la parte Demandante, en caso contrario, es un detrimento ostensible del sistema pensional, cosa que no se avisó en el actual proceso, pues no fue la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP la última administradora pensional a la que estuvo afiliada.

### **CONCLUSIONES**

La sentencia en primera instancia se realizó de acuerdo a la norma aplicable al caso, realizándose su debida interpretación y en atención a las pruebas allegadas al proceso, por lo tanto, **no hay lugar** a revocarla, pues de hacerlo, sería desconocer la normativa constitucional, legal y jurisprudencial mencionada anteriormente, desvirtuándose así la actividad judicial conforme al Estado Social de Derecho que nos cobija.

### **PETICIÓN**

Respetuosamente solicito se **CONFIRME** la decisión tomada en sentencia del **27 de octubre de 2021** por el **Juzgado Segundo Laboral del Circuito Judicial de Yopal**, toda vez que la misma se realizó teniendo en cuenta las disposiciones constitucionales, legales y jurisprudenciales aplicables al caso.

### **NOTIFICACIONES**

Las personales las recibiré en su despacho o en la calle 34 No. 10-29. Centro Empresarial BELUZ. Oficina 401. Bucaramanga. Teléfono: 6970298. Celular 3144137331. Correo electrónico: [rballesteros@ugpp.gov.co](mailto:rballesteros@ugpp.gov.co)





ABOGADOS BALLESTEROS PINZON  
S.A.S.

Nit:9006161133

-7-

Con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido por el Decreto 806 de 2020, emitido por el Ministerio de Justicia y el Derecho, para adoptar medidas de implementación de tecnologías en los procesos judiciales, manifiesto que la dirección electrónica del demandante y su apoderado judicial para notificar es [myctransportesltda@gmail.com](mailto:myctransportesltda@gmail.com), [ramirezgomezdog@gmail.com](mailto:ramirezgomezdog@gmail.com), según correo manifestado con la demanda.

Por otra parte, manifiesto que no tengo conocimiento de la dirección electrónica de notificaciones del agente del Ministerio Público delegado para el presente caso.

Atentamente,

**ROCIO BALLESTEROS PINZON.**

C.c. 63.436.224 de Vélez (Sder).

T.P. 107.904 del Consejo Superior de la Judicatura.